

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
D.C.,

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Acción de Tutela N° 11001400306420240010200 de Fabio Alonso Suarez en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad.

ASUNTO

Procede el Despacho a resolver la acción de la referencia, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad.

ANTECEDENTES

La petición y los hechos

Manifiesta el accionante que el 5 de mayo de 2020 le fue impuesta orden de comparendo por infracción codificada como (f), fecha en el cual le fue retenida su licencia de conducción.

Señala que impugnó en tiempo la orden de comparendo y, que el 20 de agosto de 2022 fue resuelta su situación de forma definitiva, en la cual fue declarado contraventor y se le impuso la suspensión de la licencia de conducción por el término de tres años.

Expresa que la resolución no fue demandada ante la jurisdicción como quiera que faltaba poco para cumplir con la sanación (menos de un año).

Alega que el fallo que lo declara contraventor no fue notificado en debida forma.

Dice que el 27 de octubre de 2023 presentó derecho de petición ante la encartada manifestando su inconformismo y haciéndole ver a la encartada que ya han pasado más de tres años sin su licencia de conducción. Informa que el pasado 21 de noviembre la demanda contestó de forma negativa.

Indica que es padre cabeza de familia y trabajador independiente y sería la conducción uno de sus sustentos y fuente de ingreso.

Así las cosas, solicita que en salvaguarda de los derechos fundamentales enunciados como vulnerados se ordene levantar la suspensión de su licencia de conducción.

ACTUACIÓN DEL JUZGADO

Al corresponder el conocimiento de la acción a este Despacho y una vez cumplidos los requisitos legales, por auto de 2 de febrero de 2024, esta fue admitida, se ordenó notificar a la accionada para que en el término de un (1) día, contado a partir del recibo de la comunicación, se pronunciara sobre los hechos en lo que se soporta la presente acción y anexara la documentación pertinente.

RESPUESTA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

La entidad enjuiciada solicitó declarar improcedente la acción constitucional, ya que esta no es el medio adecuado para discutir las actuaciones contravencionales por infracciones a las normas de tránsito, siendo la jurisdicción de lo contencioso administrativo la indicada para ello.

Por demás, hizo el recuento de la actuación contravencional adelantada señalando finalmente que no hay vulneración alguna como señala el accionante.

CONSIDERACIONES

Corresponde determinar si la convocada al trámite, ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor Fabio Alonso Suárez, cómo se alega en el escrito de amparo.

1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política tiene por objeto proteger de manera inmediata los derechos constitucionales fundamentales de una persona cuando en determinada situación resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por actos de particulares en los casos determinados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

A su vez, dispone que dicho mecanismo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que esta se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Prevé el artículo 29 de la Constitución Política respecto del derecho al debido proceso:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

A su vez, dispuso la Corte Constitucional:

“la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”. Tal derecho, siendo de aplicación general y universal “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”[92].

Esta garantía constitucional se predica de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y su goce efectivo depende de la debida integración del contradictorio” (C.C.; SU-116/2018).

De otra parte, dispuso el artículo 6° del decreto 2591 de 1991 que es improcedente este amparo “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...) la existencia de dichos medios será apreciada en concreto. En cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentran el solicitante”

3. Así las cosas conforme a lo probado dentro del trámite de esta acción, no obra prueba de la vulneración endilgada por el accionante, más aún, que el acto administrativo definitivo que le declaró contraventor de fecha 26 de agosto de 2021 fue impugnado y este se mantuvo en segunda instancia, por lo que procedía acudir a la vía de lo contencioso administrativa a demandar el acto objeto de queja y, sin embargo no lo hizo.

Por demás, debe indicarse que, la acción de tutela no es el medio apropiado para controvertir los actos administrativos sancionatorios o aquellos por los cuales se instrumenta su cobro, pues para dicho propósito debe hacerse uso de los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Empero, así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia:

“Los medios de control y medidas cautelares con los que cuenta la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para revisar la legalidad de los actos administrativos proferidos en el marco de procesos contravencionales por infracciones a las normas de tránsito, son eficaces para garantizar los derechos fundamentales de los administrados” (STP770-2019).

4. A su vez, atendiendo que el demandante manifiesta una supuesta indebida notificación de la resolución que lo declaró contraventor de las normas de tránsito, ha dicho la Corte Constitucional que dicha nulidad debe plantearse ante el juez natural.

Al respectó ha señalado:

“(...) Así las cosas, frente al conjunto de procedimientos surtidos en el transcurso de la actuación administrativa en cuestión, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona no cumplió a cabalidad con el debido proceso en los términos de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, debido a que no se comprobó la notificación realizada ni por correo ni por aviso, lo cual implica el desconocimiento del principio de publicidad y la posibilidad de que el accionante pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por lo tanto, el resto del procedimiento se encuentra viciado de nulidad. Adicionalmente, se observa falta de claridad, por parte de la Secretaría de Tránsito, frente al deber de realizar audiencia pública, lo que implica un obrar negligente de parte de esa entidad. A pesar de todo ello, se impusieron las correspondientes multas.

De lo anterior se desprende que existe una violación al derecho fundamental al debido proceso, por ende, en principio la tutela es procedente. No obstante, como se analizó, cuando existan otros medios ordinarios de defensa judicial idóneos para la protección de las garantías fundamentales y no se avizore un eventual perjuicio irremediable, se debe acudir a estos de manera preferente.

En el presente caso la actora tiene la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que se discute un acto administrativo particular. Debe tenerse en cuenta que, si bien un requisito de procedibilidad para activar ese medio de control consiste en haber agotado los recursos pertinentes en sede administrativa, requisito con el cual la actora no cumple, lo cierto es que ello obedece a una barrera que la misma administración impuso, consistente en la falta de notificación del procedimiento, consideración que torna procedente el comentado medio de control” (C.C., T-051/2016).

Por lo tanto, nada exime al accionante de acudir ante la jurisdicción administrativa, claro, salvo la inminencia de un perjuicio irremediable, hecho que no fue probado ni alegado por este.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

Primero. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por Fabio Alonso Suárez en contra de la **Secretaría Distrital de Movilidad**.

Segundo. Notificar esta determinación al accionante y a la entidad encartada, por el medio más expedito y eficaz.

Tercero. De no ser impugnado el presente fallo, remítase el expediente dentro del término legal a la Corte Constitucional para su eventual revisión. **Oficiese.**

Cuarto. En caso de ser excluida de revisión archívese definitivamente.

Comuníquese y cúmplase,

LILIAM MARGARITA MOUTHON CASTRO
Juez

Firmado Por:
Liliam Margarita Mouthon Castro
Juez
Juzgado Municipal
Civil 064
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa30de73efa5d5898c157e5b749abaf96cde85aae07d5a42a3bc16e3a0a10de0**

Documento generado en 13/02/2024 11:51:50 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>